



Las patronales del campo, la construcción y el transporte aplauden la medida. La CEOE lamenta que no la vote el Congreso

Los empresarios ante la regularización: “Es una medida necesaria”

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO
Madrid

La política económica del Gobierno de coalición ha sido muy criticada por los empresarios españoles. “Intervencionista”, “contraria a la unidad de mercado”, “propia de regímenes autoritarios”, “asfíxia normativa” o “trilera” son conceptos empleados por la CEOE para definir distintas propuestas del Ejecutivo en los últimos años. Esas críticas no se han repetido ante la regularización masiva de extranjeros pactada con Podemos, que prevé formalizar la situación de en torno a medio millón de personas que ya residen en España. La organización que preside Antonio Garamendi no ha emitido un comunicado para valorar la medida, que apoya con algunas reservas, frente al respaldo entusiasta de la mayoría de patronales sectoriales consultadas por este periódico. La construcción, el campo, la dependencia, la hostelería o el transporte se frotan las manos ante las potenciales contrataciones que facilitará la regularización y que, consideran, ayudará a sus negocios.

El argumento central de estas asociaciones para aplaudir la iniciativa es que contribuirá a paliar la falta de mano de obra que dicen sufrir. Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denuncia que ha habido campañas agrícolas “en las que parte de la fruta se ha quedado sin recolectar por falta de personal”. Considera que es una medida “necesaria y muy positiva” para su sector. “No tiene sentido que tú necesites personas para trabajar, ellos quieran hacerlo y no se pudiese por un tema administrativo”, opina Pere Roqué, presidente en Cataluña de la patronal agraria Asaja.

Esa lógica aplica calcada a otros sectores, como el transporte de viajeros. Rafael Barbado, presidente de Confebús, asegura que dado “el bum turístico que vive España” ha habido ocasiones en que ha tenido clientes dispuestos a viajar y vehículos disponibles, “pero no conductores para prestar el servicio”. En la principal patronal del transporte de mercancías añaden el matiz

de que los empleados nacionales están menos dispuestos que los extranjeros a ponerse al volante de un camión. “Vemos que los inmigrantes vienen con muchas ganas y necesidad de trabajar, de ganar dinero. En larga distancia es donde más problemas tenemos, al ser el puesto más sacrificado”, indica Miguel Pereira, asesor laboral de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

“O contamos con la inmigración o no sé quién nos va a cuidar. Es una gran oportunidad para el sector de los cuidados”, dice Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). Asegura que su sector sufre un “déficit de personal evidente” y que van a necesitar miles de nuevos empleados para afrontar el envejecimiento de la población.

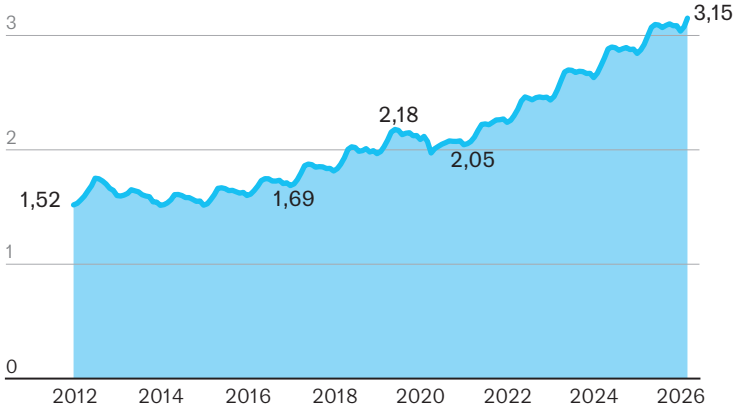
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, también mira al futuro para argumentar su respaldo a la regularización. “Para cumplir con la ambiciosa política de vivienda que se marca este país necesitamos jóvenes, mujeres y sobre todo inmigrantes”, dice. La otra pata del sector, las inmobiliarias, abundan en esa idea. “Mientras haya un control de que vengan a trabajar nos parece bien, porque además son personas que necesitarán una vivienda y será negocio para la industria”, opina el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Miguel Ángel Gómez Huecas.

Todos estos discursos parten de una premisa que no es compartida por todos los actores económicos: que España sufre un problema estructural de falta de mano de obra. Es un discurso que las patronales repiten desde hace años, pero que los sindicatos rechazan y que divide al Gobierno de coalición. Los representantes de los trabajadores argumentan que la falta de mano de obra se limita a sectores muy específicos y que el problema es que los empresarios no ofrecen condiciones atractivas. Y ponen datos sobre la mesa: España sigue siendo uno de los países con más paro de Europa (9,9%) y su tasa de vacantes está a la cola de la UE (0,9%). Los empresarios contraponen que muchos



Afiliados extranjeros a la Seguridad Social

Media mensual. En millones de afiliados



Por sectores

En marzo en promedio en el régimen general

	Afiliados	% respecto al total del sector
Hostelería	436.641	29,1%
Comercio	317.628	12,7%
Sistema Especial Agrario	262.052	39,4%
Actividades administrativas	254.974	17,5%
Construcción	250.771	24,3%
Industria manufacturera	214.935	10,6%
Transporte	164.283	17,6%
Sistema Especial Hogar	149.922	43,0%
Actividades sanitarias	128.583	6,5%
Act. científicas y técnicas	98.110	10,0%
Telecomunicaciones	79.269	13,9%
Otros servicios	69.999	14,0%
Educación	65.775	4,8%
Actividades artísticas	36.487	10,7%
Agrario	24.560	26,9%
Actividades inmobiliarias	23.506	15,0%
Actividades financieras	19.287	5,7%
Admón. pública	16.507	1,4%
Suministro de agua	10.883	6,3%
Edición	7.585	6,7%
Empleo doméstico	3.922	11,1%
Suministro de energía	2.080	5,0%
Industrias extractivas	1.413	7,1%
Org. extraterritoriales	887	28,4%

Fuente: Seguridad Social, Eurostat

EL PAÍS

de esos desempleados no aceptan las ofertas de empleo en los sectores más necesitados.

La principal voz patronal de España, Antonio Garamendi, viene mostrando su respaldo a la regularización, pero con más peros de los que agregan las voces sectoriales. “Siempre hemos dicho que hay que incorporar gente por el problema de vacantes que tenemos en muchos sectores. Pasar a A lo que estaba en B no está mal. Dar espacio a gente que lleva años trabajando en España no es malo”, dijo este miércoles el presidente de la CEOE en un foro organizado por *El Español*, antes de listar los problemas que ve en el planteamiento del Ejecutivo: “Echo de menos que se cuente con el Congreso. Dentro del diálogo social podíamos haber hablado de este asunto para ver cómo lo orientamos hacia el empleo”.

Fuentes empresariales que suelen chocar con Garamendi consideran que el perfil bajo de su respaldo, sin comunicaciones oficiales al respecto, obedece a una estrategia de contraposición con el Ejecutivo, con el telón de fondo de las elecciones en CEOE que se celebrarán a lo largo de este año. Esas fuentes creen que no quiere proyectar una imagen de entendimiento con el Gobierno que le debilite en esos comicios.

En conversación con este periódico, la presidenta de Cepyme (la principal patronal de la pequeña y mediana empresa) y también vicepresidenta de CEOE, Ángela de Miguel, lanza un mensaje parecido al de Garamendi: “Esta regularización es una oportunidad para que estas personas se integren en la sociedad española y cubran el problema de vacantes que sufren las pymes, que lo tienen más difícil para competir que las grandes empresas”. Y matiza: “Es importante hablarlo en el Parlamento porque las regulaciones que salen con acuerdos son más estables”.



La organización de Garamendi, que tiene elecciones este año, se ha mostrado tibia

Los extranjeros suponen el 14% de los afiliados a la Seguridad Social

La gran patronal catalana, Foment del Treball, aparca esos matices y subraya que la regularización “es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, opina la directora laboral de Foment, Yésika Aguilar. Entre las escasas voces claramente discordantes está la de otra gran patronal autonómica, la madrileña CEIM. “Las empresas necesitan mano de obra para cubrir vacantes en determinados sectores, y, en muchos casos, la inmigración puede ser la respuesta, pero la regularización masiva y sin criterios claros, como la que plantea el decreto, puede generar más problemas que soluciones, especialmente para las comunidades autónomas, con las que no se ha contado, que asumen el impacto en empleo, servicios públicos y recursos”, dice el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido.

Homologaciones

Los extranjeros son el 14% de los afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos distribuidos por el Gobierno. Hay sectores en los que, aunque su participación crece, apenas tienen presencia. Son los de mejores salarios y jornadas más cortas, como la Administración pública (1,4%), la educación (4,8%) o el suministro de

Ciudadanos marroquíes hacían cola el martes frente al Consulado de su país en Almería.

CARLOS BARBA (EFE)

energía (5%). Son más en los que rondan el salario mínimo y registran las jornadas más largas, como el empleo en el hogar (43%), el campo (39%) o la hostelería (29%).

Una de las principales voces patronales de esa última actividad es la de Emilio Gallego. “Como sector afectado por la falta de profesionales vemos bien la regularización, es una oportunidad. Pero nos parece una pena que se tenga que llegar a este punto, como otros gobiernos de otros colores antes”, opina el secretario general de Hostelería de España. Cree que en vez de una regularización masiva como la que se abre ahora debería haber “canales de migración ordenados y dignos para las dos partes, con selección y formación en origen”. “Es lamentable que esta pobre gente haya tenido que vivir periplos para llegar aquí y estar tanto tiempo esperando para que les regularicen”, dice Gallego.

Francisco Aranda, de la patronal logística y de transporte UNO, critica que la regularización “no esté ligada a ofertas de empleo ni itinerarios de formación”. Y subraya un aspecto que también destacan las otras patronales del transporte: los regularizados no podrán incorporarse directamente a su sector, sino que tendrán que invertir en permisos y habilitaciones para la que piden colaboración al Ejecutivo.

Eso también preocupa a los empresarios de la dependencia. “Para trabajar en las residencias es necesario un certificado de profesionalidad. No se ha avanzado apenas para ayudar a los extranjeros a que lo consigan”, denuncia Sánchez-Ostiz, que también pide mayor agilidad en la homologación de títulos superiores. Esta es una de las grandes reivindicaciones de la comunidad inmigrante, un cuello de botella que mantiene a miles de extranjeros en sectores por debajo de su cualificación.

El representante de CEAPs concede que la regularización puede detraer personal del cuidado a domicilio. Es decir, que las personas que ahora trabajan en B atendiendo a personas mayores se marchen a otros sectores menos sacrificados: “Evidentemente es una posibilidad”. Ese escenario también es previsible en el empleo en el hogar, como alerta Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD): “Esta regularización va a dar la oportunidad a muchas familias de contratar a profesionales a las que no podían dar de alta. Esperamos que muchas regularizaciones se conviertan en contratos reales, pero a la vez habrá quienes se vayan a otros sectores porque este no es un sector tan atractivo en condiciones laborales”.